

FOJA: 23 .-Veintitrés.-

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia  
JUZGADO : 8º Juzgado Civil de Santiago  
CAUSA ROL : C-7367-2023  
CARATULADO : COLEGIO / DIRECTOR REGIONAL

Santiago, dos de septiembre de dos mil veinticuatro.

**VISTO:**

Al folio 1, comparece el abogado Daniel Lagos Sandoval, mandatario judicial del ***Colegio Dunalastair Valle Norte S.p.A.***, sociedad del giro de su denominación, ambos con domicilio en avenida Presidente Riesco N°5335, oficina 404, comuna de Las Condes, quien, en juicio sumario especial, deduce demanda en virtud de la cual impugna el acto invalidatorio emitido por el ***Director Regional de la Superintendencia de Educación*** (Región Metropolitana), mediante resolución exenta N°2023/PA/13/0803 de fecha 26 de abril de 2023, notificada a su parte el 27 de abril de 2023 y solicita se acoja la acción y con su mérito, se anule la resolución impugnada y declare firme la Resolución Exenta N°2022/PA/13/1000 de fecha 29 de abril de 2022.

Expresa que mediante Resolución N°2022/PA/13/0615 de fecha 15 de marzo de 2022 se ordenó instruir un proceso administrativo al Colegio Dunalastair Valle Norte. Luego, el 24 de marzo de 2022, se llevó a cabo la formulación de cargos y por resolución 2022/PA/13/1000 de fecha 29 de abril de 2022, se aprobó el proceso administrativo y se sancionó a la actora. Sin embargo, mediante Resolución Exenta N°2023/PA/13/0639 se inicia por parte de la autoridad administrativa un procedimiento invalidatorio respecto del procedimiento sancionador seguido en contra de Colegio Dunalastair Valle Norte, invocando para ello un error de derecho en la cuantía de la multa aplicada a su representada, por cuanto la infracción sancionada se habría calificado como leve cuando debió calificarse como menos grave, de modo que, por resolución exenta N°2023/PA/13/0803, la autoridad administrativa invalidó la resolución sancionatoria 2022/PA/13/1000 de fecha 29 de abril de 2022.



Arguye que la administración no puede poner de cargo de su representada, las consecuencias de su propio actuar erróneo (Regla *nemo auditur propriam turpitudinem allegans*).

En ese contexto, la impugnante considera que la resolución impugnada intenta justificar el ejercicio de la potestad invalidatoria por parte de la administración, en la propia torpeza de ésta al haber sancionado a su mandante con una pena que no le era aplicable.

Acota que la administración no puede asilarse en su propia torpeza para ejercer una atribución a su favor que causa directo y grave perjuicio a su representada, que ahora está siendo expuesta al pago de una eventual multa de mayor cuantía, lo anterior se desprende de múltiples pronunciamientos emitidos tanto por nuestros Tribunales de Justicia como de Contraloría General de la República.

Menciona que si bien en la década de 1950 la Contraloría General de la República plantea la invalidación como principio sin excepción, dicho predicamento contralor no pudo subsistir, ya que implicaba desconocer lisa y llanamente no sólo buena fe de los terceros, enteramente ajenos a los errores de la Administración, sino, además, cargar a los administrados con las actuaciones torpes o negligentes de la autoridad, única responsable de haber actuado de modo antijurídico al dictar un acto administrativo contraviniendo el Derecho. Así, desde 1969 la Contraloría establecerá la que sería su posición en el futuro, hasta el día de hoy (Decreto 24.049 de 23 abril de 1969).

En segundo término, aduce que no procede invalidar el procedimiento administrativo seguido en contra del Colegio Dunalastair Valle Norte, ya que la potestad invalidatoria se encuentra limitada por el principio de la confianza legítima de su representada y por el principio de estabilidad de los actos administrativos.

Señala que el principio de confianza legítima puede entenderse como el amparo que debe dar el juez al ciudadano que confía en la validez y legalidad de las actuaciones de la Administración Pública. En dicho sentido, alega que la resolución 2022/PA/13/1000 de fecha 29 de abril de 2022, que aprobó el proceso administrativo y sancionó a la actora, generó en ésta una confianza legítima, es decir, aquella que depositan los ciudadanos en la



conducta administrativa bajo la creencia que el actuar de la Administración se ha realizado con apego a la legalidad vigente y que por lo tanto no sería sancionada con el pago de una multa más elevada y gravosa como ahora se pretende, lo que sería refrendado por la Contraloría General de la República y refuerza con citas jurisprudenciales.

Además, sostiene que la pretendida invalidación por parte de la administración, atenta también contra el principio de la estabilidad de los actos administrativos, conforme al cual, desde el momento de su notificación o publicación, el acto administrativo, en particular aquel de carácter decisorio, adquiere estabilidad y deviene en intangible e inmodificable para la Administración del Estado, esto por cuanto desde ese momento, adquiere plena eficacia y produce todos sus efectos sobre las situaciones jurídicas del administrado destinatario, quien incorpora dichos efectos en su patrimonio y quedan por tanto bajo el amparo de la garantía del derecho de propiedad.

Estima que, el procedimiento sancionador seguido contra su representada no puede invalidarse bajo el argumento de haberse cometido un error por parte de la Administración en virtud del límite de protección a la confianza legítima que la doctrina, Contraloría General de la República y los tribunales han establecido para el ejercicio de esta potestad, y que resultan plenamente aplicables para el caso que nos ocupa así como también en virtud del respeto al principio de estabilidad de los actos administrativos.

De otro lado, argumenta que no procede invalidar el procedimiento administrativo seguido en contra del Colegio Dunalastair Valle Norte, ya que el error de Derecho invocado por la administración para ello no vicia el acto, porque la ley se presume de derecho conocida por todos, conforme lo establece el artículo 8 del Código Civil.

Indica que se pretende invalidar el procedimiento sancionador invocando para ello un error de derecho en cuanto a la sanción aplicada, ya que ésta no sería en realidad aplicable conforme a la Ley, sin embargo, el procedimiento sancionador no puede invalidarse por este motivo, puesto que esto violaría el principio jurídico general de que el error de derecho, no vicia los actos, porque la ley se presume de derecho conocida por todos, de



modo tal que aquéllos deben considerarse válidos en cuanto a los efectos particulares que genera.

Acota que en virtud del artículo 8° del Código de Bello, se presume de derecho que la Administración, cuando dicta un acto administrativo, lo hace con pleno conocimiento de la normativa vigente y, por consiguiente, su acto administrativo es plenamente válido. Por lo tanto, si con posterioridad dicha autoridad quisiera invalidar el aludido acto, amparándose en un error de derecho suyo, no lo podría hacer ya que ello infringiría el aludido artículo que impide a cualquier persona esgrimir como causal de vicio de un acto, un error de derecho.

Culmina su presentación, en orden a solicitar que se tenga por deducida la impugnación del acto invalidatorio emitido por el Director Regional de la Superintendencia de Educación (Región Metropolitana), mediante resolución exenta N°2023/PA/13/0803, acoger a tramitación la presente impugnación y, en su mérito, anular o dejar sin efecto la resolución impugnada y declarar a firme la Resolución Exenta N°2022/PA/13/1000 de fecha 29 de abril de 2022, con costas.

Al folio 11, consta la notificación personal subsidiaria practicada a la parte demandada con fecha 11 de agosto de 2023.

Al folio 17, comparece el abogado Nicolás Alfredo Baeza Salas, en representación de la Superintendencia de Educación, contestando la demanda y pide el rechazo de la acción, con costas.

Previa reseña de las facultades legales que le asisten a su representada, contextualiza los hechos ocurridos en el procedimiento administrativo, en los siguientes términos:

i.- Acta de Fiscalización con Observaciones N°221300018 del 10 de enero de 2022: en el marco del Programa de Fiscalización “Procesos de Admisión”, se constató que el establecimiento educacional Colegio Dunalastair, RBD N°8978-08, de la comuna de Las Condes, incurrió en infracción a la normativa educacional, relativo a *“el establecimiento indica que los criterios generales de admisión y las fechas de publicaciones de los resultados del proceso de admisión se encuentran en la página web del establecimiento y además se envía por mal a todos quienes participan del*



*proceso, sin embargo, al revisar su página web esta información no se encuentra publicada”.* (fs. 37 del expediente administrativo).

ii.- Acta de fiscalización de Observaciones No Subsanadas N°221300441 del 2 de marzo de 2022: Luego de cumplido el plazo otorgado por el personal fiscalizador en el Acta de Fiscalización con Observaciones N°221300018, se procedió a consignar que el hecho infraccional constatado inicialmente no fue subsanado por el establecimiento educacional (fs. 57 del expediente administrativo).

iii.- Instrucción del procedimiento sancionatorio: con fecha 15 de marzo de 2022, a través de Resolución Exenta N° 2022/PA/13/0615, del encargado de fiscalización de la Dirección Regional de la Superintendencia de la Región Metropolitana, se ordenó la instrucción del proceso administrativo sancionatorio en contra del establecimiento de autos, y en virtud de lo señalado en la mencionada acta de fiscalización, se designó fiscal instructor a cargo del proceso administrativo (fojas 61 del expediente administrativo).

iv.- Formulación de cargos: Con fecha 30 de marzo de 2021, la fiscal instructora a cargo de la investigación, decidió formular cargo único a través del acto administrativo N° 2021/FC/13/0242, en virtud de los antecedentes expuestos en el acta de fiscalización y que se reproducen en este acto: *“Cargo único: Sostenedor no da a conocer y/o no mantiene la información exigida por la normativa educacional en los procesos admisión.*

*Hechos: El establecimiento indica que los criterios generales de admisión y las fechas de publicaciones de los resultados del proceso de admisión se encuentran en la página web del establecimiento y además se envía por mail a todos quienes participan del proceso, sin embargo, al revisar su página web esta información no se encuentra publicada*

*Normativa transgredida: Artículo 13 inciso 2° letra b) Decreto con Fuerza de Ley N°2, del 2009, del Ministerio de Educación.*

*Tipo infraccional: Infracción menos grave. Artículo 77, letra c), de la Ley N°20.529”* (fs. 64 del expediente administrativo).

v.- Descargos: con fecha 15 de marzo de 2022 04 de abril de 2022, la entidad sostenedora evacúa descargos ante el cargo formulado en su contra (fs. 72 del expediente administrativo).



vi.- Informe Final de Investigación: con fecha 28 de abril de 2022, luego de analizar los antecedentes que obran en el proceso administrativo, la fiscal instructora recomendó confirmar el cargo único formulado, proponiendo al Director Regional de la SIE de la Región Metropolitana, la aplicación de la sanción de multa a beneficio fiscal de 5 Unidades Tributarias Mensuales (fs. 81 del expediente administrativo).

vii.- Resolución que aprueba el procedimiento administrativo sancionatorio: con fecha 29 de abril de 2022, mediante la Resolución Exenta N° 2022/PA/13/1000, el Director Regional de la SIE de la Región Metropolitana, resolvió aprobar el proceso administrativo ordenado instruir a través de la Resolución Exenta N°2022/PA/13/615 de 15 de marzo, por el Encargado Regional de Fiscalización de la SIE de la Región Metropolitana, aplicando la sanción de multa a beneficio fiscal de 5 Unidades Tributarias Mensuales (fs. 89 del expediente administrativo).

viii.- Reclamación administrativa: con fecha 18 de mayo de 2022, la entidad sostenedora deduce reclamación administrativa del artículo 84 de la Ley SAC en contra de la Resolución Exenta N°2022/PA/13/1000 de 29 de abril del Director Regional de la SIE de la Región Metropolitana (fs. 97 del expediente administrativo).

ix.- Resolución que ordena iniciar procedimiento de invalidación en procedimiento administrativo sancionatorio: con fecha 03 de marzo de 2023, se pronuncia la Resolución Exenta N°000274 del Fiscal (S) de la Superintendencia de Educación, por el que se ordena el inicio del procedimiento de invalidación del procedimiento administrativo aprobado mediante la Resolución Exenta N°2022/PA/13/1000 del 29 de abril de 2022 del Director Regional de la SIE de la Región Metropolitana, por advertirse la existencia de un vicio procedimental en la etapa de resolución de proceso sancionatorio por parte del Director Regional, consistente en la aplicación de una sanción no ajustada a los rangos establecidos en la normativa, al imponerse una multa a beneficio fiscal de 05 Unidades Tributarias Mensuales por la comisión de una infracción menos grave, siendo esta multa fijada procedente solamente ante la comisión de infracciones leves, según lo dispuesto en el artículo 73 letra b) de la Ley SAC. En efecto, en conformidad a esta norma el rango de multas aplicable



a las infracciones leves se encuentra comprendida entre las 1 y 50 UTM, mientras que el rango aplicable a las infracciones menos graves se encuentra comprendido entre las 51 y 500 UTM. En el mismo acto administrativo, se procede a remitir los antecedentes a la Dirección Regional Metropolitana (fs. 100 del expediente administrativo).

x.- Resolución que inicia proceso invalidación del procedimiento administrativo: con fecha 06 de abril de 2023, mediante la Resolución Exenta N° 2023/PA/13/0639, el Director Regional de la SIE de la Región Metropolitana, resolvió iniciar proceso de invalidación del procedimiento administrativo iniciado mediante la Resolución Exenta N°2022/PA/13/0615 del 15 de marzo de 2022, particularmente, en lo correspondiente al Informe de Ponderación al Mérito del 28 de abril de 2022 y la Resolución Exenta N°2022/PA/13/1000 del 29 de abril de 2022 que aprobó el procedimiento y aplicó la sanción de multa de 5 Unidades Tributarias Mensuales, manteniéndose vigente los anteriores actos administrativos. A su vez, en el mismo acto administrativo se concede audiencia previa a la entidad sostenedora, en conformidad al artículo 53 de la Ley N°19.880 (fs. 104 del expediente administrativo).

xi.- Audiencia previa de proceso de invalidación: con fecha 14 de abril de 2023 se desarrolla audiencia previa del artículo 53 de la Ley N°19.880, respecto al procedimiento de invalidación resuelto mediante la Resolución Exenta N°2023/PA/13/0639, a la que asiste la entidad sostenedora (fs. 114).

xii.- Resolución que ordena invalidación administrativa: Con fecha 26 de abril de 2023, mediante la Resolución Exenta N°2023/PA/13/0803 se ordena la invalidación de la Resolución Exenta N°2022/PA/13/1000 del 29 de abril de 2022 que aprobó el procedimiento administrativo y aplicó la sanción de multa de 5 Unidades Tributarias Mensuales, ordenando que se retrotraiga el proceso a la etapa previa a la dictación del acto administrativo que aprobó el procedimiento administrativo sancionatorio, a fin de que en su reemplazo se dicte uno nuevo que resuelva la primera instancia administrativa. Ello, tras tenerse a la vista que la resolución que aprobó el procedimiento contenía un vicio esencial, por imponer una sanción de multa de infracciones leves, siendo que debió imponerse una sanción



correspondiente al tipo infraccional menos grave, en conformidad al artículo 73 letra b) y el artículo 77 letra c) de la Ley SAC (fs. 136 del expediente administrativo). En efecto, este es el acto administrativo que es impugnado en estos autos.

xiii.- Informe Final de Investigación: con fecha 3 de mayo de 2023, luego de analizar los antecedentes que obran en el proceso administrativo, la Fiscal Instructora, estimó confirmar el cargo único formulado, proponiendo al Director Regional de la SIE de la Región Metropolitana, la aplicación de la sanción de multa de 51 Unidades Tributarias Mensuales (fs. 143 del expediente administrativo).

xiv.- Resolución que aprueba el procedimiento administrativo sancionatorio: con fecha 09 de mayo de 2023, mediante la Resolución Exenta N° 2023/PA/13/0885, el Director Regional de la SIE de la Región Metropolitana, resolvió aprobar el proceso administrativo ordenado instruir a través de la Resolución Exenta N°2022/PA/13/615 de 15 de marzo de marzo, por el Encargado Regional de Fiscalización de la SIE de la Región Metropolitana, aplicando la sanción de multa a beneficio fiscal de 51 Unidades Tributarias Mensuales (fs. 149 del expediente administrativo).

xv.- Reclamación administrativa: con fecha 22 de mayo de 2023, la entidad sostenedora deduce reclamación administrativa del artículo 84 de la Ley SAC en contra de la Resolución Exenta N°2023/PA/13/0885 de 09 de mayo de 2023, del Director Regional de la SIE de la Región Metropolitana (fs. 162 del expediente administrativo).

xvi.- Resolución que rechaza reclamación administrativa: con fecha 05 de julio de 2023, mediante la Resolución Exenta N°000682, el Fiscal (S) de la SIE, resolvió rechazar la reclamación administrativa del artículo 84 de la Ley SAC deducida por la entidad sostenedora, confirmando la Resolución Exenta N°2023/PA/13/0885 del 09 de mayo de 2023 que aprobó el procedimiento y aplicó la sanción de 51 Unidades Tributarias Mensuales (fs. 173 del expediente administrativo).

Puntualizado y descrito lo anterior, contestando derechamente la impugnación, indica que la potestad invalidatoria es inherente a la función administrativa, por lo que todo órgano de administración tiene el deber de reaccionar en contra de sus actos contrarios a Derecho en ejercicio de un





poder de autotutela inseparable de la finalidad pública que le corresponde servir, sin necesidad que un texto expreso lo autorice. Su fundamento se halla en el deber constitucional de que todo órgano del Estado debe conformar su acción a la Constitución Política de la República y a las normas dictadas conforme a ella.

En cuanto a sus causales, el inciso 1° del artículo 53 de la Ley N° 19.880 dispone: “*Invalidación. La autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto. La invalidación de un acto administrativo podrá ser total o parcial. La invalidación parcial no afectará las disposiciones que sean independientes de la parte invalidada.*” Al respecto, que el acto sea contrario a derecho comprende los vicios del artículo 7° de la Constitución dentro de las que se encuentran los “*Vicios Formales o de Procedimiento*” condicionado a la concurrencia del doble requisito que impone la Ley N°19.880 en el inciso 2° del artículo 13° para que tenga eficacia invalidante.

En segundo lugar, arguye que no se advierte de qué manera la invalidación ordenada mediante la Resolución Exenta N°2023/PA/13/803 del 26 de abril de 2023, del Director Regional de la SIE de la Región Metropolitana, pudo haberse configurado como un ejercicio abusivo de esta figura jurídica, ni tampoco la forma en que involucró una afectación al principio de confianza la confianza legítima, toda vez que el Servicio con el objeto de dejar sin efecto un acto contrario a derecho, hizo uso de una facultad que el propio legislador concedió, cumpliendo todos y cada uno de los requisitos expuestos en ella. Por una parte, desde la *faz procedimental*, el ejercicio de la facultad invalidatoria fue ejercido legalmente y cumpliendo con cada una de sus etapas, destacándose que ella se ejerció dentro del plazo de 2 años establecidos por el legislador. Esto pues, desde la fecha de la notificación de la Resolución Exenta N° 2022/PA/13/1000 que aprobó proceso administrativo (29 de abril de 2022), hasta la notificación de la resolución que invalidó dicho acto administrativo (27 de abril de 2023), transcurrieron 11 meses y 29 días.



Fue así que, mediante la Resolución Exenta N° 2023/PA/13/0639 del 06 de abril de 2023, el Director Regional de la SIE de la Región Metropolitana, resolvió iniciar proceso de invalidación del procedimiento administrativo instruido mediante la Resolución Exenta N°2022/PA/13/0615 del 15 de marzo de 2022, particularmente, en lo correspondiente al Informe de Ponderación al Mérito del 28 de abril de 2022 y la Resolución Exenta N°2022/PA/13/1000 del 29 de abril de 2022 que aprobó el procedimiento y aplicó la sanción de multa de 5 Unidades Tributarias Mensuales.

Luego, con fecha 14 de abril de 2023, se desarrolló la audiencia previa con el representante de la entidad sostenedora, por modalidad remota (fs. 114) a fin de salvaguardar su derecho a defensa. En dicha instancia, el establecimiento educacional presentó un escrito denominado: *“Evacúa descargos en relación con el proceso de invalidación del procedimiento administrativo sancionador seguido contra el Colegio Dunalastair SpA”* (fs. 121), efectuando similares argumentaciones a las expuestas en el presente juicio sumario con el objeto de dejar sin efecto el procedimiento invalidatorio.

Acto seguido, fue pronunciada motivadamente la Resolución Exenta N°2023/PA/13/0803 del 26 de abril de 2023, que ordenó la invalidación de la Resolución Exenta N°2022/PA/13/1000 del 29 de abril de 2022 que aprobó el procedimiento administrativo y aplicó la sanción de multa de 5 Unidades Tributarias Mensuales, ordenando retrotraer el proceso a la etapa previa a la dictación del acto administrativo que aprobó el procedimiento sancionatorio, a fin de que en su reemplazo se dictase uno nuevo que resolviese la primera instancia administrativa. Por otro lado, desde la *faz sustantiva*, aparece que el motivo de dicha determinación se ajustó plenamente a lo dispuesto a la normativa educacional.

Refiere que habiéndose formulado el cargo *“sostenedor no da a conocer y/o no mantiene la información exigida por la normativa educacional en los procesos admisión”*, por vulneración al artículo 13 inciso 2° letra b) del Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 2009, del Ministerio de Educación, y configurando esta vulneración una infracción de carácter menos grave del artículo 77 letra c) de la Ley SAC, la Dirección Regional



Metropolitana procedió a una aplicar una sanción de multa de improcedente a este tipo infraccional, por el *quantum* de 5 Unidades Tributarias Mensuales.

Hace presente que se debe tener a la vista que el artículo 73 letra c) de la Ley SAC expresamente dispone que, en el caso de las infracciones menos graves, procede la sanción de multa de comprendida en un rango entre las 51 y 500 Unidades Tributarias Mensuales, por lo que resultó evidente que la sanción de multa de 5 Unidades Tributarias aplicada originalmente por la Dirección Regional Metropolitana mediante la Resolución Exenta N°2022/PA/13/1000 no se ajustó a lo regulado en la normativa del ramo y al tipo infraccional confirmado durante el procedimiento administrativo. De ahí que se hizo necesario proceder con la dictación de este acto invalidatorio.

A partir de lo anterior, fue que la Superintendencia procedió a pronunciar la Resolución Exenta N°2023/PA/13/0885 del 09 de mayo de 2023, del Director Regional de la SIE de la Región Metropolitana, aprobando el proceso administrativo ordenado instruir a través de la Resolución Exenta N°2022/PA/13/615 de 15 de marzo de marzo, por el Encargado Regional de Fiscalización de la SIE de la Región Metropolitana, confirmando el mismo cargo formulado y aplicando la sanción de multa a beneficio fiscal de 51 Unidades Tributarias Mensuales; sanción que sí se ajustaba a la normativa educacional previamente citada, desestimando de esta manera un actuar abusivo por parte de la demandada.

En tercer lugar, en cuanto al supuesto perjuicio generado a la entidad sostenedora con este nuevo acto administrativo, hace presente que el sujeto fiscalizado contó con la vía administrativa, participando en cada una de las etapas del procedimiento sancionatorio, siendo completamente analizado el hecho infraccional discutido por parte de la Superintendencia. En los hechos, frente a la resolución que confirmó el cargo y aplicó la sanción que legalmente correspondía, el sostenedor ejerció la respectiva reclamación administrativa del artículo 84 de la Ley SAC, a fin de que el Superintendente pudiese revisar la decisión sancionatoria adoptada por la autoridad regional, en pleno resguardo del debido proceso y su derecho de impugnación. En dicha oportunidad, realizó las alegaciones y presentar los



medios de prueba pertinentes, a fin de desacreditar el hecho infraccional fundante del cargo, los que fueron sujeto de análisis motivado por parte de este servicio mediante la Resolución Exenta N°000682 del 05 de julio de 2023 del Fiscal (S) de la SIE, que procedió a rechazar su impugnación administrativa, teniendo a la vista la normativa educacional aplicable al caso, las alegaciones esgrimidas por el sujeto fiscalizado, las razones para desestimarlas y los elementos de determinación del *quantum* de la sanción atinentes al caso.

En suma, alega que se desprende que la invalidación impugnada fue ejercida cumpliendo con el principio de legalidad. En dicho sentido, se dilucida que el sostenedor intenta, mediante la presente demanda, que se reviva una situación que es contraria a derecho y que lo beneficia, mediante una sanción que no se condice con la calificación legal de la infracción y la gravedad que le asignó el legislador, buscando así soslayar la aplicación de la normativa educacional y la obligación de responder al cumplimiento de sus obligaciones. De manera que insistir en una sanción contraria a derecho supondría el aprovechamiento del error de la administración por parte del actor, cuestión que no debe ser acogida en el control de juridicidad hace la judicatura.

Asimismo, todos sus argumentos relativos a la confianza legítima no tienen asidero en el presente caso, en tanto la resolución que aprobó el procedimiento y que fue posteriormente invalidada, no establece derechos en su favor, por cuanto se trata de un procedimiento sancionatorio, en la que la Superintendencia por mandato legal está facultada para fiscalizar el cumplimiento de la normativa educacional y aplicar sanción por derecho corresponda, en caso de que se constate una vulneración a la normativa.

Finalmente, en cuanto a la solicitud de suspensión del procedimiento administrativo que esgrimió la demandante a folio 8 de la carpeta electrónica, se debe insistir que lo impugnado en esta sede es la Resolución Exenta N° 2023/PA/13/0803, de fecha 26 de abril de 2023, del Director Regional de la Superintendencia de Educación de la Región Metropolitana, que ordenó invalidar la Resolución exenta N° 2022/PA/13/1000, de fecha 29 de abril de 2022, que aprueba proceso administrativo, y ordenó



retrotraer el proceso a la instancia de dictación de una nueva resolución que aprobase proceso.

De tal suerte, si bien la entidad sostenedora impugnó dicho acto mediante la presente acción civil, aquello no inhibió a este servicio proseguir con la tramitación de las etapas pendientes del procedimiento administrativo. Así, siendo dicha resolución (la que ordenó la invalidación) la que es impugnada ante este Tribunal y no la posterior resolución sancionatoria que se dictó por la Dirección Regional, como tampoco la resolución del Superintendente que dio fin a la etapa de impugnación administrativa, no tendría aplicación el inciso final del artículo 54 de la Ley N° 19.880

Aún más, indica que, habiéndose dictado la resolución que afinó el procedimiento y rechazó la reclamación administrativa de la entidad sostenedora con fecha 05 de julio de 2023, su representado recién fue notificado del libelo deducido en estos autos con fecha 11 de agosto del mismo año, esto es, con posterioridad a la ejecutoriedad del procedimiento sancionatorio substanciado en sede administrativa, procediendo que todo lo alegado sobre esta materia se íntegramente rechazado.

Al folio 19, consta la realización del llamado a conciliación, la que no se produjo por desavenencia de las partes.

Al folio 22, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que consta en autos.

Al folio 33, se citó a las partes a oír sentencia.

### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que el abogado Daniel Lagos Sandoval, mandatario judicial del *Colegio Dunalastair Valle Norte S.p.A.*, en juicio sumario especial, deduce impugnación del acto invalidatorio emitido por el *Director Regional de la Superintendencia de Educación* (Región Metropolitana), mediante resolución exenta N°2023/PA/13/0803 de fecha 26 de abril de 2023, notificada a su parte el 27 de abril de 2023 y solicita se acoja la presente impugnación y con su mérito, se anule la resolución impugnada y declare firme la Resolución Exenta N°2022/PA/13/1000 de fecha 29 de abril de 2022, con costas.



Basa su acción en los fundamentos de hecho y derecho reseñados en lo expositivo de la presente sentencia.

**SEGUNDO:** Que en el comparendo de estilo y según minuta escrita del folio 17, comparece el abogado Nicolás Alfredo Baeza Salas, en representación de la Superintendencia de Educación, contestando la demanda y pide el rechazo de la acción, con costas, según lo reseñado en la parte expositiva de este fallo.

**TERCERO:** Que con el fin de acreditar los fundamentos de la impugnación, la actora rindió prueba instrumental, consistente en:

- Resolución exenta N°2023/PA/13/0803 emitida por el Director Regional de la Superintendencia de Educación. (**Al anexo folio 1**).

**CUARTO:** Que a su turno, la reclamada, igualmente sólo rindió instrumental, correspondiente a:

- Copia del expediente de tramitación del proceso administrativo sancionador. (**A los anexos de folios 17 y 24**).

**QUINTO:** Que mediante la acción intentada en autos, la actora pretende que se anule la resolución exenta N°2023/PA/13/0803 de fecha 26 de abril de 2023 y, en consecuencia, se declare firme la Resolución Exenta N°2022/PA/13/1000 de fecha 29 de abril de 2022.

**SEXTO:** Que del mérito de los antecedentes que obran en la causa, esto es, la copia del expediente administrativo en cuestión, no objetado por las partes, es posible tener por acreditados los siguientes hechos:

1.- Que mediante Resolución Exenta N° 2022/PA/13/1000, de 29 de abril de 2022, el Director Regional de la Superintendencia de Educación de la Región Metropolitana aplicó a la sostenedora la sanción de multa a beneficio fiscal de 5 Unidades Tributarias Mensuales, respecto de la cual, en lo pertinente a la calificación de los cargos, se indicó por tipo infraccional correspondió al de “infracción menos grave” de la letra c) del artículo 77 de la Ley N°20.529. Además, en el numeral 7° se esbozó que el Director Regional de la Superintendencia de Educación de esta Región, estuvo de acuerdo con el informe de proceso propuesto por la fiscal instructora.

2.- Que en virtud de la Resolución Exenta N°000274 del Fiscal (S) de la Superintendencia de Educación, de 3 de marzo de 2023, se ordenó el



inicio del procedimiento de invalidación del procedimiento administrativo aprobado mediante la Resolución descrita en el numeral que precede, por advertirse la existencia de un vicio procedimental en la etapa de resolución de proceso sancionatorio por parte del Director Regional, consistente en la aplicación de una sanción no ajustada a los rangos establecidos en la normativa, al imponerse una multa a beneficio fiscal de 5 Unidades Tributarias Mensuales por la comisión de una infracción menos grave, siendo esta multa fijada procedente solamente ante la comisión de infracciones leves, según lo dispuesto en el artículo 73 letra b) de la Ley N°20.529. (SAC). Luego, con fecha 6 de abril de 2023, se concedió audiencia previa a la reclamante.

3.- Que, la Resolución Exenta N°2023/PA/13/0803 del 26 de abril de 2023, recurrida en estos autos, dispuso la invalidación de la Resolución Exenta N°2022/PA/13/1000 del 29 de abril de 2022, que aprobó el procedimiento administrativo y aplicó la sanción de multa de 5 Unidades Tributarias Mensuales, y ordenó que se retrotraiga el proceso a la etapa previa a la dictación del acto administrativo que aprobó el procedimiento administrativo sancionatorio, con el fin que se dicte uno nuevo que resuelva la primera instancia administrativa. Ello, tras tenerse a la vista que la resolución que aprobó el procedimiento contenía un vicio esencial, por imponer una sanción de multa de infracciones leves, siendo que debió imponerse una sanción correspondiente al tipo infraccional menos grave, en conformidad al artículo 73 letra b) y el artículo 77 letra c) de la Ley SAC.

4.- Que con fecha 9 de mayo de 2023, mediante la Resolución Exenta N° 2023/PA/13/0885, el Director Regional de la Superintendencia de Educación de la Región Metropolitana, aprobó el proceso administrativo y aplicó la sanción de multa a beneficio fiscal de 51 Unidades Tributarias Mensuales.

5.- Que mediante Resolución Exenta N°000682, el Fiscal (S) de la Superintendencia rechazó la reclamación administrativa deducida por la entidad sostenedora, confirmando la Resolución Exenta N°2023/PA/13/0885 del 9 de mayo de 2023 que aprobó el procedimiento y aplicó la sanción de 51 Unidades Tributarias Mensuales.



**SÉPTIMO:** Que sobre el particular es necesario tener en consideración que el artículo 53 de la Ley N° 19.880, que trata sobre la invalidación de los actos administrativos, dispone que: *“La autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto.*

*La invalidación de un acto administrativo podrá ser total o parcial. La invalidación parcial no afectará las disposiciones que sean independientes de la parte invalidada.*

*El acto invalidatorio será siempre impugnabile ante los Tribunales de Justicia, en procedimiento breve y sumario”.*

Por su parte, el artículo 6 de la Constitución Política de la República establece que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República.

Finalmente el artículo 7 de nuestra Carta Fundamental prevé que los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.

**OCTAVO:** Que por invalidación debe entenderse la extinción del acto administrativo en razón de haber sido dictado éste en contra del ordenamiento jurídico, producto de un acto posterior en sentido contrario de la propia administración pública que lo ha dictado. (PROG. Jorge Bermúdez Soto, “El principio de confianza legítima en la actuación de la administración como límite a la potestad invalidadora. Rev. Derecho Valdivia dic. 2005, volumen 18 N° 2).

De otro lado, la Corte Suprema, ha señalado que debe tenerse en consideración que los actos administrativos pueden ser dejados sin efecto por un Órgano de la Administración por razones de legalidad o por mérito, oportunidad o conveniencia. En el primer caso se denomina invalidación y en el segundo, revocación. (Rol 18154-2018).

**NOVENO:** Que -como se señaló- en la parte expositiva y en el motivo quinto de la presente sentencia, lo pretendido por la actora es invalidar la Resolución Exenta N°2023/PA/13/0803 de fecha 26 de abril de 2023 y, en consecuencia, se declare firme la Resolución Exenta





N°2022/PA/13/1000 de fecha 29 de abril de 2022, por cuanto, la demandada no puede asilar el ejercicio de la potestad invalidatoria en su propio actuar erróneo, esto es, en haber calificado la primitiva sanción con el carácter de “leve”, en circunstancias que era “menos grave”, cuestión que incidió en el *quantum* de la sanción impuesta en la resolución que luego fue invalidada, la que en los hechos de 5 UTM pasó a 51 UTM.

En tales condiciones, la impugnante dirige su argumentación en el sentido que la demandada invalidó el acto que había impuesto una sanción menos gravosa, sin respetar los principios de confianza legítima y de estabilidad de los actos administrativos, además de infringir lo dispuesto en el artículo 8 del Código Civil.

**DÉCIMO:** Que, al respecto cabe tener en consideración que no toda ilegalidad trae aparejada la invalidación del acto administrativo. En este sentido, se ha admitido que el principio de conservación del acto administrativo evita que se invaliden decisiones adoptadas en un procedimiento administrativo cuando se ha incurrido en alguna ilegalidad, pero ella no es de una relevancia tal que amerite expulsar del ordenamiento jurídico el acto administrativo que le pone término. Del mismo modo, se ha aceptado que en circunstancias especiales y calificadas los derechos adquiridos de buena fe y las situaciones jurídicas consolidadas limitan la potestad invalidatoria de la Administración.

**UNDÉCIMO:** Que en ese contexto, en primer término cabe elucidar si el acto en cuestión reviste alguna ilegalidad y en segundo lugar, si la resolución invalidatoria vulneró los principios antes señalados.

En ese orden de ideas, en cuanto a la legalidad del acto, del análisis de los antecedentes y la normativa antes reseñada, la resolución invalidatoria, no aparece ni ilegal ni arbitraria, desde que realiza una exposición clara, detallada y completa de los antecedentes que conforman el proceso administrativo de invalidación, agrega aquellas alegaciones formuladas por la reclamante y determina precisamente por las facultades de las que está dotado en órgano administrativo, la sanción que resulta atinente a la falta en que incurrió la actora y que por error había sido calificada en un rango y cuantía ostensiblemente menor a la prevista por el legislador.



En tales condiciones, la Resolución Exenta N°2023/PA/13/0803 de fecha 26 de abril de 2023, es producto de un procedimiento legalmente tramitado, en observancia a la Constitución Política de la República y la ley 19.880, en especial su artículo 53 que consagra la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si fuere procedente. Potestad que ha sido ejercida por la reclamada conforme al marco de sus competencias.

**DUODÉCIMO:** Que dicha conclusión a la que se ha arribado no se contrapone al principio de confianza legítima y al principio conservación del acto administrativo, toda vez que, revistiendo la nulidad el carácter de remedio excepcional frente a la ilegalidad de un acto, ella sólo será procedente si el vicio es grave y esencial, cuestión que ocurre en el caso de autos, desde que el yerro en que incurrió la administración y que fue advertido por ésta dentro del plazo previsto por el legislador es de tal magnitud que significó enrolar los actos cometidos por la actora en un rango inferior que no se condice en lo absoluto con aquél que según la ley del ramo correspondía.

En ese escenario, la irregularidad o defecto es de carácter esencial y justifica la declaración de nulidad por parte de la Administración, sin que se produjera las afectaciones a que alude la reclamante.

En este punto, cabe añadir que la alegación de la actora respecto a la afectación del artículo 8° del Código Civil, no resulta posible de atender, desde que la misma parte en conocimiento de la comisión de una falta menos grave según se expresa en el procedimiento cuestión, no puede pretender sustraerse del *quatum* que el legislador tiene aparejada para tales infracciones y en ese sentido tal argumentación es contraria a su propia argumentación.

**DECIMOTERCERO:** Que, en consecuencia, se rechazará la acción, puesto que el acto administrativo, se dictó con apego a la potestad legal y reglamentaria y dentro de las competencias conferidas y sin afectar los principios aludidos, en observancia de la Constitución y las leyes.

**DECIMOCUARTO:** Que, no altera lo concluido, la prueba documental rendida por la impugnante, toda vez que guarda relación con la misma rendida en parte por la demandada.



**DECIMOQUINTO:** Que no se condenará en costas a la parte demandante por presentar motivos plausibles para litigar.

Y vistos, además lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución Política de la República, los artículos 41 y 53 y siguientes de la Ley N° 19.980, los artículos 73 letra b y c) y 77 de la Ley N°20.529, los artículos 144, 159, 160, 161, 170, 254, 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, ***SE DECLARA:***

I.- Que ***se rechaza la demanda de impugnación*** de acto en procedimiento sumario intentada al folio 1 por el abogado Daniel Lagos Sandoval, mandatario judicial del ***Colegio Dunalastair Valle Norte S.p.A.***

II.- Que ***no se condena al pago de las costas a la actora*** por haber litigado con fundamento plausible.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

**Rol: C-7367-2023.**

**DICTADA POR DOÑA ISABEL EYZAGUIRRE FLORES,  
JUEZ TITULAR.**

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, dos de septiembre de dos mil veinticuatro.**



